

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL
Manizales, junio dos (2) de dos mil veinte (2020).

SENTENCIA 073

RAD.2020-00082

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** a través de su representante legal, en contra del **CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ – TOLIMA, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ - TOLIMA** por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y debido proceso.

II. ANTECEDENTES

Precisa la actora, que en virtud a un proceso de selección que venía adelantando con la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer unos cargos de vacante definitiva de la entidad, inició las averiguaciones pertinentes para verificar el cumplimiento de los requisitos del señor JUAN CARLOS NEIRA SANTAMARÍA como designado para el desempeño de uno de los empleos convocados.

En virtud de lo anterior, el pasado 10 de marzo de 2020 la entidad suscribió sendos derechos de petición dirigidos a la Presidencia del Concejo Municipal de la ciudad de Ibagué, a la Asamblea Departamental del Tolima, a la Secretaría de Planeación del Municipio de Ibagué Tolima y a la Cámara de Comercio de la misma ciudad, con el fin de corroborar la información consignada en los certificados laborales que aportó el participante antes mencionado a la convocatoria del empleo.

A la fecha de la presentación de la acción de tutela, no ha obtenido respuesta a los derechos de petición incoados.

III. PRUEBAS

Aportadas por la parte accionante:

- Copia de los derechos de petición con sus respectivos soportes de envío y recibido por las entidades accionadas.

IV. PRETENSIONES

Se pretende con esta acción se tutelen los derechos fundamentales incoados y se ordene a las entidades accionadas contestar de forma clara y de fondo los derechos de petición radicados en sus instalaciones.

V. ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante auto del día 21 de mayo de 2020, se admitió la presente acción de tutela, decretándose las pruebas presentadas por el accionante, corriéndose traslado para que las accionadas se pronunciaran sobre el particular e hicieran valer las pruebas o solicitaran las correspondientes para su defensa.

Dicha providencia fue notificada a través del correo electrónico de los involucrados en la misma fecha con reporte de entrega satisfactorio.

VI. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y VINCULADAS

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, reconoció la presentación del derecho de petición de parte de la DTSC, sin embargo, precisó que fue remitida por competencia a la Secretaría de Planeación Municipal para que fuese allí resuelta la solicitud. Decantado lo anterior, es claro que por funciones la competencia para dar respuesta a la petición de acceso a la información, incoada por la Directora General de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por medio de la cual solicita la verificación del predio ubicado en la "Carrera 5ª 2-50, Centro" es del resorte de la Dirección de Información y aplicación de la norma urbanística. De ahí que el Jefe de la Oficina Jurídica mediante memorando, le solicitó a la Secretaría de Planeación dar respuesta con carácter urgente al peticionario.

Mencionado lo anterior, esa Oficina Jurídica considera pertinente aclarar al Despacho, que en virtud de la desconcentración de funciones, le corresponde a la Secretaría de Planeación, a través de la Dirección de Información y aplicación de la norma urbanística, aclarar los hechos de la presente acción, y de ser el caso, dar una respuesta de fondo, clara y precisa a la petición de información objeto de esta acción de amparo constitucional.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ, TOLIMA, indicó que con fecha 11 de marzo de 2020 se recibió solicitud de información (DG-100-0102) radicada de manera interna bajo el código CCI-01E20-2783 de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, solicitando información de manera física a la carrera 21 No. 29-29 Manizales-Caldas o al correo electrónico talentohumano@saluddecaldas.gov.co del certificado de Cámara y Comercio de un establecimiento de comercio de nombre o razón social Legal Company Responsabilidad y Confianza.

Por lo anterior se dio trámite a la solicitud mediante oficio de fecha 12 de marzo firmado por el Secretario Jurídico de la Cámara de Comercio donde expresa: "En atención al oficio DG-100 0102 del 10 de marzo de 2020, recibido el 11 del mismo mes y año bajo el No. CCI-01E202783, me permito informarle que revisada nuestra base de datos, no se encontró establecimiento y/o sociedad con la razón social LEGAL COMPANY RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA." Este documento se envió al correo electrónico talentohumao@saluddecaldas.gov.co.

El 21 de mayo de 2020 se nos notificó la acción de tutela de la referencia y una vez notificados se hizo la revisión de los archivos para revisar la situación y se evidencio que por un error involuntario se envió la respuesta a la dirección de correo de la dirección de correo equivocada, por lo que se procedió a enviarse nuevamente el 25 de mayo del año en curso la información solicitada al correo talentohumano@saluddecaldas.gov.co de la DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, así mismo el 26 de mayo del año en curso se envía nuevamente la información por parte del Secretario Jurídico, sin hasta el momento de la contestación recibir confirmación de la recepción de la información, para dar cumplimiento así a lo ordenado por el señor Juez de Tutela.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, manifestó que el día 12 de marzo de 2020, se recibió en la oficina de correspondencia del Concejo Municipal de Ibagué, oficio DG 100-0097 firmado por JIMENA ARISTIZABAL LOPEZ en calidad de Directora General de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Efectivamente el doctor Ricardo Fabián Rodríguez Lozano, mediante oficio 2020-0218 de fecha dos de abril de 2020 da respuesta a la petición, solicitándole al peticionario un término de 30 días para otorgar respuesta de fondo, dada la complejidad de la petición y sustentada en la necesidad de verificar el archivo físico de la entidad, lo cual con ocasión a la pandemia del COVID 19 y a las restricciones en la movilización de los ciudadanos y de los trabajadores del Concejo Municipal, no era posible hacerlo e incluso al día de hoy existen dificultades para recurrir de la manera presencial a las instalaciones del Concejo Municipal.

En dicha respuesta, también se le manifestó que la información solicitada no se encontraba en los archivos virtuales de la entidad.

El día 5 de mayo de 2020, una vez revisadas las plataformas del Portal de Contratación SECOP y SIA OBSERVA, mediante oficio 2020-00276 el suscrito en calidad de presidente, otorga respuesta de fondo a la petición de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, respuesta que fuera remitida al correo electrónico información@saluddecaldas.gov.co señalado en el pie de página del oficio DG-100-0097 objeto de esta acción de tutela.

Se aclara señor Juez, que la respuesta se envió al correo electrónico suministrado en la petición recibida por medio físico, que se encuentra en el pie de página del oficio (información@saluddecaldas.gov.co) en consideración a que para esa fecha, no se estaban realizando actividades de atención presencial en las instalaciones del Concejo Municipal, ello en atención a las Resoluciones expedidas por el Concejo Municipal con ocasión a la pandemia del COVID -19.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, precisó que con oficio de 26 de mayo de 2020, dio respuesta a la petición elevada por la DTSC y fue remitida al correo electrónico de la peticionaria.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a este Juzgado determinar si la accionada la entidad vinculada han vulnerado los derechos de la accionante y en tal caso si amerita la protección por vía de tutela. Además se analizará si han desaparecido los motivos que dieron lugar a la presente acción y hay mérito para declarar hecho superado. Para ello se hará alusión a

las normas que regulan el derecho de petición y a las consideraciones que en tal sentido emite la Corte Constitucional, además sobre la procedencia de declarar hecho superado.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede este Funcionario Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VIII. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO DE PETICIÓN

Según el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, para lo cual el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al reglamentar dicho ejercicio consagra en su artículo 14 el término para resolver así: Salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días y aquellas mediante las cuales se eleva una consulta deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes. Cuando no fuere posible resolver o contestar en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, antes del vencimiento señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, la Corte Constitucional considera que el núcleo esencial de esta prerrogativa reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, sin que necesariamente deba acceder positivamente a sus requerimientos. En ese sentido ha manifestado:

"(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible¹; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares²; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición³ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁴; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder;⁵ y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado".⁶

De otro lado ha dicho la jurisprudencia⁷ que la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer,

¹ Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

² Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

³ Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

⁴ Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

⁵ Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁶ Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

⁷ Sentencia T-183 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio en el ente respectivo. En ese sentido afirma que se satisface ese derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido dado.

También ha reiterado la Alta Corporación⁸ que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe *"cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición."* (La sub línea es del despacho).

CASOS EN QUE PROCEDE EL HECHO SUPERADO:

En materia de tutela el hecho superado se presenta cuando cesan los motivos que dieron lugar a la acción, bien porque los mismos ya no representan peligro frente a los derechos fundamentales objeto de protección o porque el accionar de la autoridad accionada ha permitido satisfacer las necesidades del actor.

En ese sentido ha dispuesto la alta corporación constitucional⁹ que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

Por su parte la sentencia T-146 de 2012 (M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) define la situación *"cuando durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado."*¹⁰

Así las cosas, siendo la tutela el mecanismo inmediato para la protección de los derechos fundamentales, en caso que los motivos que dieron lugar a su interposición hayan desaparecido, bien porque cesó la acción del posible infractor o porque éste realizó los actos necesarios tendientes al restablecimiento de las prerrogativas afectadas, el papel del juez pierde eficacia en cuanto a ordenar su salvaguarda por carencia total de objeto para decidir.

En otra oportunidad la jurisprudencia constitucional¹¹ indicó que *el objeto jurídico de la acción de tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir.*

⁸ Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

⁹ Sentencia T-988 de 2002

¹⁰ Sentencia T-1130 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

¹¹ T-481 de 2010. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez

En correspondencia con los anteriores antecedentes jurisprudenciales la Corte Constitucional ha trazado unos requisitos para determinar si se está frente a la existencia de un hecho superado:

"1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

"2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

"3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado."¹²

Finalmente el mismo tribunal dispuso que cuando se presente carencia actual de objeto el juez de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió vulneración de los derechos fundamentales demandados y determinando el nivel de protección, con base en el acervo probatorio allegado al proceso.¹³

IX. EL CASO CONCRETO:

La Dirección Territorial de Salud de Caldas a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela por considerar vulnerado su derecho de petición, en razón de que las entidades accionadas, no le habían brindado respuesta a sus solicitudes de información.

Encontrándose en trámite este mecanismo constitucional, se recibió de parte de la entidad demandante, correo electrónico informando que a la presente fecha han recibido respuesta de la Asamblea Departamental de Tolima y de la Cámara de Comercio de Ibagué. Por lo tanto, solicitaron se informara si este Juzgado tenía conocimiento o había sido entregada respuesta alguna de parte de la Secretaría de Planeación del Municipio de Ibagué y del Concejo Municipal de la misma ciudad, y en caso afirmativo fuese enviada a la dirección electrónica para su conocimiento.

Sobre el particular, este Despacho recibió contestación al escrito tutelar de parte del Concejo Municipal de Ibagué en donde informaron que ya habían brindado respuesta a la petición, aportando la prueba de ello; y de la Alcaldía Municipal de la misma ciudad, precisando que habían remitido por competencia la petición a la Secretaría de Planeación Municipal, para que desde allí respondieran la solicitud de la actora, sin que se hubiese recibido a la fecha del presente fallo.

En virtud de lo anterior, para el conocimiento de la accionante, se remitieron a su correo electrónico ambas respuestas para que pudieran acceder a la información correspondiente.

En ese sentido, a este punto de la controversia se observa que de los cuatro derechos de petición incoados inicialmente el 10 de marzo de 2020 por parte de la DTSC y que fueron objeto de este asunto, se recibieron respuesta a tres de ellos, estos son, Asamblea Departamental de Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué (aceptados por la actora) y

¹² Sentencia T-045 de 2008.

¹³ Sentencia T-901 de 2009

Concejo Municipal de la misma ciudad (puesta en conocimiento por este Despacho), brillando por su ausencia el de la Secretaría de Planeación Municipal.

Al verificar los términos de que trata la Ley 1755 de 2015, puede inferirse que el ente accionado que omitió dar respuesta a la solicitud planteada, dentro del plazo legal respectivo, lleva a concluir que en efecto existió vulneración al derecho fundamental de la actora de parte de la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué. No obstante también reconoce este operador judicial que respecto a las demás entidades se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

Precisamente en relación con el hecho superado, la alta corporación constitucional¹⁴ afirma que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

Así las cosas, siendo la tutela el mecanismo inmediato para la protección de los derechos fundamentales, en caso que los motivos que dieron lugar a su interposición hayan desaparecido, bien porque cesó la acción del posible infractor o porque éste realizó los actos necesarios tendientes al restablecimiento de las prerrogativas afectadas, el papel del juez pierde eficacia en cuanto a ordenar su salvaguarda por carencia total de objeto para decidir, en lo que respecta a las entidades Asamblea Departamental de Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué y Concejo Municipal de la misma ciudad.

Sin embargo, deberá protegerse de inmediato el derecho de petición de la actora, frente a la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, por cuanto no ha brindado respuesta a su solicitud de información, pese haber transcurrido más del tiempo legal para su proceder, por lo tanto, se le ordenará que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, si no la hecho, brinde una respuesta de fondo, de forma clara, precisa, de manera coherente y lógica con lo solicitado por la accionante, en la petición radicada el pasado 10 de marzo de 2020 en la entidad.

En mérito de lo expuesto, EL **JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN CIVIL DE MANIZALES, CALDAS**, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Por ser procedente, **TUTELAR** el derecho constitucional fundamental de **PETICIÓN** de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS** a través de su representante legal, frente a la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA**.

SEGUNDO: ORDENAR a la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ, TOLIMA** que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, si no la hecho, brinde una respuesta de fondo, de forma clara, precisa, de manera coherente y lógica con lo solicitado por la accionante, en la petición radicada el pasado 10 de marzo de 2020 en la entidad.

¹⁴Sentencia T-988 de 2002

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto a las pretensiones dirigidas en contra de las entidades **ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ Y CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ.**

CUARTO: NOTIFICAR por el medio más expedito esta decisión a las partes interesadas como lo ordena el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, indicando que contra esta decisión procede el recurso de impugnación dentro de los tres (3) días siguientes.

QUINTO: REMÍTASE el expediente ante la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser objeto de recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Rendón Tamayo', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning and a long, sweeping stroke at the end.

**SANTIAGO RENDÓN TAMAYO
JUEZ**